

LA REFORMA ECONÓMICA Y LA CRISIS DEL IMPERIO SOVIÉTICO

por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Luis Ángel ROJO DUQUE *

1. Hace unos meses expuse ante esta Academia algunas reflexiones sobre la situación y los problemas de la economía soviética al iniciarse el año 1990. Las condiciones económicas eran desastrosas y amenazaban con agravarse aún más. El Gobierno, tras cuatro años de *perestroika* y de insistencia en la necesidad de dejar paso a una economía de mercado, continuaba enredado en reformas tímidas y mal articuladas. El panorama ofrecía pocas razones al optimismo.

El sistema de planificación central y propiedad pública de los medios de producción se había mostrado incapaz de ordenar una economía moderna de complejidad creciente. Tal vez fuera un sistema eficaz para forzar las primeras etapas de la industrialización del país —aunque la nueva historia soviética, escrita sin el sometimiento a consignas oficiales, también venía a dudar de que las penalidades impuestas por los primeros planes quinquenales pudieran justificarse por los resultados obtenidos—; pero, en cualquier caso, desde mediados de los años sesenta la economía soviética venía registrando tasas de crecimiento cada vez más bajas que condujeron a una situación de estancamiento del producto y de descenso de la renta por habitante en los años ochenta.

El lanzamiento de la *perestroika* se expresó en la denuncia, desde el poder, de la ineficacia del sistema, de su fabulosa capacidad para derrochar recursos y de la abundante corrupción que generaba; y los ciudadanos soviéticos, al amparo del *glasnost*, pudieron corroborar esas denuncias y multiplicarlas a partir de sus experiencias diarias. En 1986, la catástrofe de Chernobyl trajo al país graves dudas sobre su capacidad para utilizar las tecnologías avanzadas y dio paso a la denuncia de los

* Sesión del martes 12 de febrero de 1991.

males ecológicos que padecía, desde el desastre del mar de Aral, resultado de un plan de regadíos tan gigantesco como mal concebido, hasta la contaminación insostenible que afectaba a numerosas áreas industriales. Tras tantos años de una propaganda encaminada a mantener la fe en el sistema y a alimentar el orgullo nacional, aquel brusco enfrentamiento con la realidad de la Unión Soviética había perdido la carrera en que estaba empeñada con las economías capitalistas y ni siquiera podía considerar superado el subdesarrollo, sumió a los ciudadanos en un clima de frustración y pesimismo.

El Gobierno afirmaba que la solución a tantos problemas había que buscarla en el mercado, pero no podía esperar que el pueblo se convirtiera en fuerza impulsora de esa idea. La propaganda oficial había presentado al mercado, durante muchas décadas, como el origen de múltiples males; el sistema soviético había conseguido doblegar el estímulo y la iniciativa individuales, y los ciudadanos, aunque no comprendiesen adecuadamente el funcionamiento de una economía de mercado, intuían correctamente que su introducción requeriría transformaciones profundas que podían afectar negativamente, durante un período transitorio pero quizá largo, a sus rentas reales y a sus puestos de trabajo. El paso al mercado había de ser, por tanto, el resultado de una revolución desde arriba, pero ningún marxista podía creer que la burocracia planificadora, el aparato del PCUS, las autoridades locales o los dirigentes de las empresas estatales fueran a colaborar de buen grado en un proyecto que iba en contra de sus intereses, y, así, Gorbachov y su entorno pudieron comprobar cómo las medidas flexibilizadoras, introducidas a partir de 1987, eran anuladas o debilitadas en sus efectos por las normas, interpretaciones y conductas con las que esa extensa burocracia condicionó su aplicación.

Sin embargo, tampoco el Gobierno central tenía las ideas claras. Gorbachov hablaba de una «reforma económica radical», paralela a la «voladura» que prometía del viejo sistema político, pero nunca estuvo claro el contenido de la reforma que contemplaba. Temía, sin duda, los costes sociales y políticos de los ajustes necesarios para dar entrada a los mecanismos de mercado, y, además, no entendía bien lo que esa transformación entrañaba: continuaba hablando de un «socialismo de mercado planificado» y se resistía a aceptar el restablecimiento de la propiedad privada. Así que el fracaso de la «Ley de Empresas Estatales» y de las demás medidas introducidas desde 1987 no era imputable solamente al sabotaje de los burócratas; era también la consecuencia de su timidez y de su falta de coherencia.

Las medidas de flexibilidad aplicadas desde 1987 pretendían liberar a las empresas de los rígidos objetivos del plan, pero éstos se vieron sustituidos, en buena medida, por pedidos estatales y, además, las empresas, cuando se encontraron con márgenes de decisión sobre su producción y sus ventas, se enfrentaron con graves problemas para obtener materias primas, semimanufacturas, financiación y compradores en una economía sin mercados desarrollados. Las reformas daban a las empresas mayores grados de libertad para administrar su masa salarial y su excedente; pero como no se introducía una disciplina financiera que sustituyese a la disciplina del plan central, los responsables de las empresas procedieron, con frecuencia, a traducir su libertad

en elevaciones de salarios y en la retención de beneficios que hubieran ido, en otro caso, a alimentar los ingresos del presupuesto público. Las medidas adoptadas no abordaban, por otra parte, el problema central de las distorsiones de precios y éstas se vieron, además, reforzadas por la resistencia de las autoridades a aceptar que los aumentos registrados en los costes se tradujesen en elevaciones de los precios. Tal resistencia llevó, inevitablemente, a un fuerte incremento de las subvenciones, que provocaron, a su vez, junto con otros factores, un rápido aumento del déficit público; y como el sistema financiero soviético apenas está desarrollado y los tipos de interés sobre la deuda pública no superaban al 3 por 100, los déficit presupuestarios hubieron de ser financiados con una fuerte expansión de la cantidad de dinero.

Así se alimentó una situación inflacionaria intensa: el público había visto engrosar fuertemente sus rentas disponibles para el gasto y poseía una importante capacidad de compra en forma de billetes y de depósitos bancarios; al mismo tiempo, las autoridades mantenían los precios al consumo con subvenciones crecientes; las consecuencias eran la proliferación de las escaseces en los mercados oficiales, el acaparamiento de productos por los consumidores —cuando los encontraban— y la expansión de los mercados negros y grises. La inflación, medida por los precios oficiales, continuaba siendo baja —el 3 o el 4 por 100—, pero la inflación efectiva, medida por los precios practicados en el conjunto de los canales de oferta, superaba ampliamente el 10 por 100, al iniciarse el año 1990, y mostraba un ascenso continuo. En estas condiciones, las pequeñas cooperativas, principal cauce de reconocimiento oblicuo de la propiedad familiar, aprovechaban las escaseces para obtener beneficios y dedicaban buena parte de sus esfuerzos a desviar productos de los canales oficiales a los mercados negros —alentando, en el proceso, la corrupción—; ésta era la forma poco propicia a generar simpatía, en la que el pueblo soviético podía observar la iniciativa privada en funcionamiento.

2. Los problemas que pesaban sobre la situación crítica de la economía soviética, al comenzar el año 1990, podían adscribirse a tres áreas interrelacionadas.

En primer lugar era precisa una estabilización monetaria y fiscal de la economía. Había que reducir el déficit público —que se aproximaba al 10 por 100 del producto interior bruto— hasta niveles que permitiesen su financiación sin recurrir a fuertes expansiones monetarias, y ello requería, de un lado, un reforzamiento de los ingresos fiscales y, de otro, una reducción de los gastos públicos, en especial de las subvenciones a los precios y a empresas con pérdidas. Al mismo tiempo había que introducir reformas en el sistema financiero para ofrecer al público activos con una rentabilidad suficiente para proteger los ahorros frente a la inflación: ello permitiría absorber una gran parte de la capacidad de compra, mantenida por las familias en forma de billetes y depósitos, que presionaba sobre los mercados de consumo y, en la medida que se ofreciese un tipo de interés razonable sobre la deuda pública, haría posible la financiación no monetaria del déficit público. Era preciso, además, reducir la expansión del crédito bancario y frenar los aumentos salariales concedidos por las empresas. Y

era necesario, en fin, proceder a una unificación del tipo de cambio, a un nivel realista, que apoyase la liberación progresiva del comercio exterior.

En el área fundamental de los precios, los problemas se referían tanto al nivel absoluto de muchos de ellos como a su distorsionada estructura relativa. Abordar este tema resultaba básico para que los precios pudieran ofrecer una orientación a las inversiones, para disponer de criterios que permitieran decidir el grado de rentabilidad de actividades y empresas, para conexas la economía soviética con el resto del mundo mediante unos flujos comerciales relativamente libres —con una protección arancelaria razonable— y para normalizar los mercados interiores y reducir las subvenciones. La liberalización de los precios era el camino más propicio para que éstos buscasen sus niveles absolutos y relativos adecuados, ya que la búsqueda de esos niveles a través de precios controlados estaría sometida a toda clase de errores, fricciones y obstáculos políticos. La elevación resultante del nivel de precios obligaría a mantener transitoriamente los controles sobre un grupo de bienes y servicios básicos y quizá a proporcionar transferencias de renta a los grupos sociales más modestos, pero el ajuste de precios era necesario y también lo era el que no condujese a una espiral inflacionista a través de los salarios.

El tercer ámbito de problemas se refería al tema, más profundo y complejo, de la reforma de las empresas, donde las dificultades planteadas por la privatización eran tantas que no cabía pensar en avances muy rápidos. Tal vez hubiera que empezar por las empresas de dimensión media y pequeña, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios, y dejar para más adelante el tema de las grandes empresas estatales. En cualquier caso, sin embargo, era preciso introducir una disciplina financiera estricta que las sometiese a los criterios de rentabilidad. Y las consecuencias normales de esa mayor disciplina obligaban a diseñar inmediatamente un sistema adecuado de seguro de desempleo.

Este bosquejo de los problemas planteados y de las líneas básicas para abordarlos —que responde al diagnóstico y las recomendaciones centrales del informe sobre la economía soviética preparado por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en el otoño pasado¹— recoge los temas principales que han sido objeto del debate económico en la Unión Soviética a lo largo de 1990. Podían variar las prioridades atribuidas a los problemas y podían discutirse las líneas de reforma y su articulación en el tiempo, pero no cabía dudar de la gravedad de la situación y de la necesidad de abordarla con decisión; y decisión es lo que les faltó a los dirigentes reformistas en 1990.

El viceprimer ministro, Leonid Abalkin, preparó, en el otoño de 1989, un plan radical de reforma económica que se proponía introducir una economía de mercado para finales de 1991, pero el Comité Central del PCUS lo rechazó en diciembre y adoptó otro plan alternativo, presentado por el primer ministro, Nicolai Ryzhkov, que era mucho más moderado en sus propuestas y objetivos. Esta tensión entre propuestas

¹ IMF, IBRD, OECD, EBRD, *The Economy of the URSS*, diciembre 1990.

radicales de reforma y reacciones conservadoras iba a proseguir a lo largo de 1990 —año que presenció la elaboración sucesiva de cuatro programas de transición a una economía de mercado— sin que los fuertes poderes presidenciales que Gorbachov se había asegurado en el mes de marzo sirvieran para dar el triunfo a los reformistas radicales que tenía en su entorno. Durante el verano, y como consecuencia de un acuerdo entre Gorbachov y el presidente de la federación rusa, Boris Yeltsin, se encomendó a un equipo dirigido por el profesor Stanislav Shatalin la elaboración de un programa de reforma, conocido como «plan de los quinientos días», que, aunque inicialmente apoyado por Gorbachov, fue pronto abandonado ante las presiones conservadoras. Ese plan puede haber sido el canto del cisne de los reformistas radicales, porque en octubre fueron finalmente aprobadas unas «Líneas básicas de estabilización económica y transición a una economía de mercado» de orientación claramente conservadora.

El presidente Gorbachov, al presentar esas líneas básicas de reforma, ofreció un retrato veraz de la situación soviética en octubre de 1990 con estas palabras:

«La situación de la economía continúa deteriorándose. El volumen de producción está descendiendo. Los vínculos económicos se están rompiendo. Aumenta el separatismo. El mercado de consumo está en un estado calamitoso. El déficit presupuestario y la solvencia del Gobierno están en niveles críticos. El crimen y los comportamientos antisociales están aumentando. El pueblo encuentra la vida cada vez más difícil y pierde su interés en el trabajo y su fe en el futuro. La economía está en un gran peligro. El antiguo sistema administrativo de dirección ha sido destruido, pero falta el ímpetu para trabajar en un sistema de mercado. Hay que adoptar medidas enérgicas, con el consentimiento del pueblo, para estabilizar la situación y acelerar el progreso hacia una economía de mercado.»

Sin embargo, de lo que carecía el programa aprobado era, precisamente, de medidas enérgicas. Su aprobación expresaba la influencia creciente de los conservadores sobre Gorbachov, y los hechos posteriores no han hecho más que confirmar el avance de esa influencia. El alejamiento de liberales que pertenecían al círculo próximo a Gorbachov, como Alexander Yakovlev, filósofo de la *perestroika*, y Stanislav Shatalin, uno de sus asesores económicos más escuchados, es sólo parte de un proceso que incluye el nombramiento de Kravchenko, conocido por sus escasas inclinaciones reformistas, como director de la radio y la televisión estatales, la sustitución del liberal Bakatín por el antiguo jefe de la KGB en Lituania, Pugo, en el Ministerio del Interior, y la designación, como nuevo primer ministro, de Valentín Pavlov, uno de los mayores críticos del «plan de los quinientos días» desde su anterior posición como ministro de Hacienda; un proceso que alcanza su momento más destacado con la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Edward Shevardnadze, asediado por las críticas de las fuerzas conservadoras a su política exterior.

La disensión sobre los problemas económicos y sus soluciones no era, sin embargo, la motivación de este proceso y la creciente presión de los conservadores. El enfren-

tamiento entre radicales y conservadores, en relación a la reforma económica, aún expresaba la principal división política en la Unión Soviética durante los últimos meses de 1989, pero un año después el resurgir de los nacionalismos y el resquebrajamiento de la Unión habían pasado a ocupar el centro del debate político. El «plan de los quinientos días» pretendía lanzar un programa de reforma económica radical con la colaboración y el apoyo de las repúblicas, a las que entregaba dosis considerables de poder, y de este modo hacía confluír dos temas capaces de alarmar a la alta burocracia comunista, al ejército y a la KGB —esta última alarmada, además, por la fuerte reducción de su presupuesto previsto en el programa elaborado por Shatalin y su grupo—. Ahora podían presentarse en un bloque de oposición a la reforma que ocultase la defensa de los intereses de grupo tras una apelación a la ley y el orden y que denunciase el radicalismo reformista como un riesgo de capitulación ante el separatismo y el caos. Gorbachov comenzó a ceder crecientemente ante esas presiones en el verano de 1990.

3. El rápido deterioro de la economía soviética y el proceso de desintegración del Imperio son dos fenómenos en interrelación acumulativa. La denuncia de los males del sistema económico, el anuncio de una reforma que no acababa de llegar y el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida han contribuido significativamente a que numerosas repúblicas se preguntaran cuáles eran las ventajas de pertenecer a la Unión y pusieran en cuestión el papel que una planificación central de reconocida ineficacia les había asignado dentro del conjunto. Los enfrentamientos entre grupos étnicos, la fuerza disgregadora de los nacionalismos y las tensiones crecientes entre las repúblicas y el poder central han agravado, a su vez, los problemas económicos en la medida que han provocado movimientos migratorios de difícil absorción y de consecuencias negativas para la producción —como ha ocurrido, por ejemplo, en la producción petrolífera del área de Bakú como resultado de la huida de los técnicos armenios ante las agresiones de los azeríes—; han inducido a las repúblicas, en respuesta a las escaseces, a impedir la salida de productos de los límites de sus territorios y a concertar acuerdos bilaterales de trueque; han generado dificultades en la aplicación de las medidas de reforma del Gobierno central —unas veces porque las repúblicas temían sus efectos; otras, más significativas, porque las repúblicas querían aplicar reformas más radicales en sus territorios— y, en fin, han estado a punto de provocar una crisis fiscal en la Unión, a comienzos de 1991, cuando algunas repúblicas se negaron a aportar las contribuciones a los ingresos centrales que se les había asignado.

La Unión Soviética se compone de 15 repúblicas federadas que, según la Constitución de 1977, con soberanas y están libremente asociadas. Una de ellas, la República Federal Socialista Rusa, representa más de la mitad del territorio, la población y la producción de la Unión y contiene, junto con Ucrania y Bielorrusia, la gran mayoría de la población eslava. Además de las 15 repúblicas federadas, dentro de ellas y dependientes de ellas hay, en la Unión Soviética, 20 repúblicas autónomas —16 en la república rusa— y cuatro regiones autónomas. Cada república de la Federación,

república autónoma o región autónoma, está basada en una nacionalidad, pero en cada una de ellas conviven varias nacionalidades y grupos étnicos, cuyo número se acerca a 120 en el conjunto de la URSS. Además, esa convivencia multiétnica ha sido estimulada o impuesta por el sistema soviético a través de movimientos migratorios alentados o forzosos. De los 288 millones de ciudadanos soviéticos, unos 60 millones viven fuera de sus repúblicas étnicas de origen --de ellos, casi 30 millones son rusos—. Esta población desplazada es la consecuencia, en buena medida, de grandes operaciones de colonización —principalmente con rusos— o de deportaciones masivas como las de los tártaros de Crimea y los alemanes del Volga, enviados por Stalin a Asia Central. Las repúblicas establecidas sobre este mosaico étnico muestran, en fin, una interdependencia económica muy elevada. Si el conjunto de la Unión Soviética es una economía de escaso comercio con el resto del mundo, las repúblicas que la componen están, por el contrario, interrelacionadas por corrientes intensas de bienes que reflejan las decisiones de los planes centrales sobre la localización de actividades y empresas en el territorio soviético.

La propaganda oficial había venido presentando la sociedad soviética como una comunidad nueva donde la opresión y las desigualdades y discriminaciones étnicas habían desaparecido para ser sustituidas por la amistad entre los pueblos y el respeto a las culturas nacionales. Otra cosa era, sin embargo, la realidad tal y como la percibían los ciudadanos, quienes acumulaban frustraciones y rencores nacionales e irracionales, dispuestos a aflorar tan pronto como cesase la intensidad de la represión. La *perestroika* y el *glasnost* vinieron a dar ocasión y amparo a la expresión de esas tensiones reprimidas.

Gorbachov trató de alentar, en las repúblicas, la creación de *frentes populares* que actuaran como movimientos sociales de apoyo a la *perestroika*. Los primeros *frentes populares* se crean en los estados bálticos en el verano de 1988 y movimientos similares surgen en otras muchas repúblicas durante los meses siguientes, pero los propósitos iniciales que inspiraron su creación quedaron pronto desvirtuados: los *frentes* se convirtieron rápidamente en cauces preferentes de expresión de las inquietudes nacionalistas y escaparon al control de las autoridades².

Las inquietudes nacionalistas tenían contenidos diversos según las repúblicas —económicos, culturales, religiosos, ecológicos, políticos—, y las reivindicaciones iniciales han evolucionado posteriormente de modo distinto y con intensidad dispar de unas repúblicas a otras.

Desde un primer momento, el movimiento nacionalista adquirió su mayor virulencia en los estados bálticos, que tenían memoria de una vida política independiente y democrática, iniciada en 1918 y truncada por la violencia con su incorporación a la Unión en 1940, tras el pacto germano-soviético de 1939, y que incluso podían alegar su estatuto privilegiado, semiautonómico, en el Imperio zarista. Las reivindicaciones condujeron, primero, a la proclamación de la soberanía perdida —a pesar de la letra

² Cf. Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE, *La gloire des nations ou la fin de l'Empire Soviétique*, Fayard, 1990.

de la Constitución soviética— y a la petición, desde esa soberanía, de apertura de negociaciones sobre la participación de las repúblicas en la Unión, pero no había concluido el año 1989 cuando ya planteaban —con Lituania siempre en primera posición— el reconocimiento de su independencia.

Los problemas se extienden, sin embargo, a otras muchas repúblicas. En Bielorrusia, las causas del descontento son la catástrofe de Chernobyl y sus consecuencias inciertas. En Moldavia, arrebatada a Rumania en la Segunda Guerra Mundial, las protestas iniciales sobre problemas lingüísticos acaban conduciendo, como en los países bálticos, a la denuncia del pacto germano-soviético por inaceptable en el derecho internacional y a la búsqueda de la soberanía. En Ucrania la inquietud es menor, pero en su parte occidental, también incorporada a la Unión durante la Segunda Guerra Mundial, se exige que termine la represión del catolicismo. En Armenia y Azerbaiján, el origen de los problemas es la región autónoma del Alto Karabakh, enclave armenio dentro de la república de Azerbaiján, que, harta de las discriminaciones azeríes, vota por mayoría aplastante su unión con Armenia. La solidaridad de Armenia y la reacción hostil de Azerbaiján conducen a enfrentamientos sangrientos entre armenios y azeríes que culminan en matanzas de armenios a manos azeríes en el Alto Karabakh y en Bakú mientras Moscú, de donde se espera una solución, sigue la evolución de los acontecimientos con actitud dubitativa, toma decisiones que a nadie satisfacen y, ante la persistencia de los ataques a la población armenia, acaba enviando el ejército y la policía, que practican una represión de consecuencias trágicas en Bakú, en enero de 1990. Para entonces, sin embargo, ni Armenia ni Azerbaiján creen que sus problemas puedan resolverse a través de Moscú, a cuyas autoridades dejan de obedecer al tiempo que piden una modificación radical de las relaciones entre las repúblicas y la Federación. A la misma conclusión llega Georgia, cuyos problemas tienen su origen en las pretensiones de secesión en la república autónoma de Abkhazia, cuya población musulmana denuncia la discriminación y los esfuerzos colonizadores a que se ve sometida por los georgianos, de religión cristiana. Esos intentos de secesión se contagiarán, más tarde, a la región autónoma de Ossetia, también enclavada en Georgia y que preferiría salir de esta última para incorporarse a la república de Rusia. La reacción adversa de Georgia lleva a movilizaciones y conflictos hasta que el enfrentamiento de Georgia con Moscú sube de tono como consecuencia de la represión sangrienta por el ejército de una manifestación en Tíblis en abril de 1989. En las repúblicas de Asia Central, el descontento, legitimado por la religión islámica, tiene sus raíces en un subdesarrollo económico cada vez más grave y se expresa en un rechazo de las minorías de inmigrantes —rusos en primer lugar, pero también tártaros, alemanes, armenios y meskhes— que acaba en explosiones de violencia y en masacres dirigidas, especialmente, contra las minorías de origen trascaucásico. Este rápido recorrido de problemas aún podría cerrarse con una referencia a la aparición del nacionalismo en la república de Rusia, fenómeno aparentemente paradójico que expresa la desmoralización ante el hundimiento del sistema soviético y una reacción frente a la hostilidad con que los rusos son tratados por otras nacionalidades. Y, así, Rusia, corazón de la experiencia soviética, pasa a denunciar que la

construcción de la URSS la ha desangrado, que su cultura histórica ha sufrido daños irreparables, que su población —declinante, envejecida, con las más altas tasas de mortalidad y alcoholismo de la Unión— sufre una discriminación sistemática en los sistemas educativo y sanitario, y reafirma su soberanía.

Los problemas son, como se ve, muy diversos en cuanto a su contenido y su intensidad, pero dos rasgos les son comunes: primero, todos se han activado ante el fracaso reconocido del sistema soviético, y segundo, todos se han visto exacerbados por la incomprensión, las vacilaciones y los errores del Gobierno central, que ha acabado por convertirse en el enemigo común. Las dudas y las contradicciones de Moscú se ponen tanto más de manifiesto cuanto más se agravan los problemas; por ello, el ímpetu independentista de las repúblicas bálticas —con Lituania a la cabeza— se convirtió, a lo largo de 1990, en la gran pesadilla de Gorbachov. Éste trata de frenar los procesos de independencia prometiendo, a primeros de año, convertir la URSS en una «verdadera Federación» que devolverá a las repúblicas los poderes reales que nunca han tenido, pero en el mes de marzo hace votar al Congreso de los Diputados del Pueblo una reforma que instituye un poder presidencial fuerte en la URSS y que permite al presidente someter a cualquier parte del territorio soviético a la «ley presidencial», es decir, a un régimen de excepción, y el día 4 de abril el mismo Congreso aprueba una ley que regula las modalidades de secesión de una república y que diseña un proceso complejo, larguísimo y lleno de trampas, incapaz de satisfacer los deseos de independencia de una república en un período inferior a seis años en el mejor de los casos. Puesto que los países bálticos siguen adelante con sus procesos, Gorbachov les promete abrir una negociación más breve que la prevista por la ley a cambio de la renuncia a las declaraciones unilaterales de independencia, les amenaza después con exigencias de indemnizaciones económicas y desgajamientos territoriales, somete Lituania a un bloqueo económico prolongado, alienta los movimientos de las minorías enemigas de la independencia y hace intervenir al ejército y la policía, con resultados trágicos en enero de este año —aunque Gorbachov niegue un conocimiento previo de las decisiones que determinaron, de modo inmediato, estos sucesos, repitiendo así la actitud que adoptó, dos años antes, tras los sangrientos enfrentamientos del ejército con la población georgiana de Tíblis—. Alcanzado este punto, Gorbachov aún propone a los dirigentes bálticos conversaciones con referencia a un nuevo proyecto de Tratado de la Unión, pero sin contemplar en ellas el tema de la secesión.

Gorbachov no ha comprendido el problema de los nacionalismos y, como en el ámbito de la reforma económica, ha seguido una vía media y vacilante que a nadie satisface: ni a los partidarios de una línea dura, que querrían aplastar los movimientos independentistas y sofocar decididamente los enfrentamientos de las repúblicas con el poder central, ni a quienes consideran que la estructura actual de la Unión es un legado insoportable del pasado —para no hablar de quienes no admiten más futuro que la independencia para determinadas repúblicas—. Gorbachov no ha querido entender que lo que estaba en crisis era el sistema soviético en su integridad y que, en lugar de llamamientos a la paciencia y la moderación de procesos incontrolables,

era preciso avanzar con decisión hacia una reforma de la Unión que cediera dosis importantes de soberanía a las repúblicas y que contemplara la secesión de algunas de ellas. También como en el ámbito económico, las dilaciones y la ausencia de un propósito definido han generado elementos de caos —declaraciones de soberanía o de independencia, sometimiento de las leyes nacionales a las republicanas, creación de guardias republicanas, protección de insumos y prófugos frente al ejército en varias repúblicas, etc.— y han reforzado la posición de los enemigos del cambio. La antorcha de las reformas ha tendido a escapar de las manos de Gorbachov para pasar, tanto en el ámbito político como en el económico, a manos de las repúblicas enfrentadas con Moscú. El antagonismo entre las repúblicas y el poder central ha venido a confundirse, crecientemente, con el enfrentamiento entre los partidarios de reformas económicas radicales y los enemigos de las mismas. Gorbachov, al desplazarse hacia los defensores de la ley y el orden, se ha alejado del reformismo económico radical.

4. El año 1990 se perdió en vacilaciones y luchas por el poder. La tensión entre las repúblicas y el Gobierno central no hizo sino aumentar y la economía continuó hundiéndose en una crisis profundísima: el producto soviético descendió en torno a un 5 por 100, la inflación efectiva siguió elevándose hacia el 20 por 100, la balanza de pagos aumentó fuertemente su déficit y las reservas exteriores bajaron a niveles preocupantes; pero todo esto da escasa idea de la experiencia vivida por el pueblo soviético, sometido al racionamiento de gran cantidad de artículos, enfrentado con unos mercados oficiales desabastecidos, empujado hacia los mercados negros y consciente de que su supervivencia empieza a depender de la ayuda proporcionada por los países capitalistas.

Ésta es la difícilísima situación de partida sobre la que va a incidir el nuevo programa de reformas, cuyo contenido y estructura están poco definidos. ¿Puede resultar eficaz un programa de reformas como el que va a aplicarse, basado en las orientaciones aprobadas en octubre y ajeno, por tanto, a los criterios básicos que vienen siendo caracterizados como «radicales»? Pronto se sabrá, pero hay buenas razones para el escepticismo.

El nuevo programa se plantea, en una primera etapa, objetivos de estabilización de la economía. Mantiene el control y la supervisión de los precios, porque los dirigentes soviéticos entienden que una liberación de los precios sería inadecuada y peligrosa en estos momentos. Al comenzar el mes de enero se han elevado unos 1.500 precios controlados al por mayor, pero aún no se ha decidido la correspondiente elevación de los precios al por menor, porque se quiere hacerla depender de un acuerdo entre el Gobierno central y las repúblicas que no se ha alcanzado hasta ahora (febrero). El señor Komin, vicepresidente del Comité Estatal de Precios, ha comentado que cada mes de retraso en el ajuste al alza de los precios al por menor costará unos 8.000 o 10.000 millones de rublos al maltrecho erario público soviético como consecuencia del necesario aumento de las subvenciones. Además, el señor Komin ha anunciado que las elevaciones de precios irán acompañadas de compen-

saciones a los salarios, las pensiones y otras asignaciones; las compensaciones —dijo— podrían ser del 100 por 100 para el aumento de los precios de los alimentos y de productos tales como la ropa de niño, pero sólo serán parciales para los precios de artículos más caros, como los bienes de consumo duradero ³. Por otra parte, no se ha contemplado una contención del crédito ni una reducción de la tasa de expansión monetaria —que sería un vano empeño si no se reduce el déficit público—. Hasta el momento, la única medida financiera aplicada ha consistido en obligar al público a convertir los billetes de alta denominación, de 50 y 100 rublos, a los que se ha privado de curso legal, en moneda de más baja denominación, con un plazo de conversión de tres días y un canje máximo de 1.000 rublos por persona. Se pretende así —según el primer ministro, Valentín Pavlov— absorber una parte de la masa de poder de compra que alienta la inflación y hacerlo, básicamente, a costa de los ricos y de los especuladores. También se ha limitado el montante máximo de retiradas de las cuentas bancarias a 500 rublos por mes.

El examen de estas reformas ha llevado a los expertos en economía soviética y a los frustrados reformistas radicales del interior a vaticinar (vaticinio fácil) una intensa aceleración de la inflación y un aumento de los desequilibrios. Las medidas financieras no conseguirán su objetivo de dañar a los ricos, pero introducirán en el público una grave desconfianza sobre el sistema bancario e inducirán probablemente, en contra de sus deseos, un estímulo a la demanda de bienes, las escaseces y la inflación; sus efectos no serán más favorables que los que pueda conseguir la KGB en la nueva tarea que se le ha asignado de supervisar las contabilidades de las empresas privadas, individuales o cooperativas, nacionales o con participación extranjera. Los partidarios de la ley y el orden creen en las confiscaciones, los controles y la inspección policial como medios para combatir la inflación y la especulación, y éste es un error cuyas consecuencias pueden ser muy graves.

Hay, sin embargo, indicios de que los errores entre los responsables actuales de la economía soviética pueden ser más generales y, por tanto, más graves. Hace unos días, por ejemplo, Yuri A. Prokofiev, alto cargo del PCUS y persona muy cercana a Gorbachov, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que no habría retirada respecto de las líneas básicas de la *perestroika*, es decir, respecto del avance hacia la economía de mercado y hacia un sistema multipartidista; pero inmediatamente después indicó que no se iría a un desplazamiento pleno de la Unión Soviética a la economía de mercado —como el que habían propuesto anteriores asesores económicos— porque ello traería «años de caos», y añadió que lo que tenían en la cabeza los dirigentes soviéticos era un paso organizado estatalmente a las estructuras del mercado, al estilo —dijo— de los modelos seguidos en Corea del Sur y en Chile; esto —aclaró— permitiría acelerar un proceso que, confiado al libre juego de las fuerzas económicas, tardaría siglos en desarrollar el mercado, como había sucedido en Estados Unidos y Europa Occidental ⁴. Aun dejando piadosamente a un lado esta última referencia a

³ *Financial Times*, 4 de enero de 1991, pág. 2

⁴ *International Herald Tribune*, 5 febrero de 1991, pág. 2

las experiencias históricas de Estados Unidos y Europa, resulta inquietante que sistemas de represión con propiedad privada puedan tomarse en consideración como modelos para un sistema de represión con propiedad pública de los medios de producción.

En medio de la opacidad y las incertidumbres de la situación soviética, una interpretación de estas y otras declaraciones llevaría a caracterizar la actitud de las fuerzas conservadoras que parecen haber impuesto su influencia sobre Gorbachov como un propósito de mantener la integridad de la Unión y restablecer el poder del Gobierno central frente a las repúblicas como condición previa para desarrollar una reforma económica pausada, controlada por el Estado y preocupada por las reacciones que medidas como el alza de los precios al consumo podrían generar en la población —reacciones que, por lo demás, se trataría de prevenir con unidades combinadas del ejército y la política como las que, desde hace algunos días, patrullan las ciudades—. Cabe dudar, sin embargo, de que las fuerzas conservadoras, una vez reafirmadas en el poder, estén dispuestas a abordar una reforma de la Unión capaz de satisfacer las aspiraciones de las repúblicas, como cabe dudar de que acepten y sepan desarrollar una reforma económica adecuada para resolver los gravísimos problemas económicos que padece el país. Y si la reforma constitucional de la Federación no es satisfactoria y las medidas económicas agravan los problemas de una situación ya extrema, se entra en un mundo de conjeturas sombrías que pueden barajar desde graves enfrentamientos civiles hasta intentos de involución hacia un pasado que parece definitivamente lejano, pasando por calamidades económicas y éxodos masivos.

Otra interpretación posible —poco probable, pero preferible— sería que Gorbachov aún no ha perdido la partida de la reforma y que, por el contrario, continúa jugando en el área media de compromisos que le caracteriza. La reciente actuación contundente sobre las repúblicas bálticas ha sido, desde luego, bastante menos intensa de lo que querían los conservadores de la línea dura, quienes acusan al presidente de haber perdido los nervios a última hora; pero, en todo caso, ha rendido el fruto de moderar las posiciones de Yeltsin, quien en los últimos días viene diciendo que la república rusa no quiere poner en peligro la Unión y que tampoco desea crear un ejército de la república rusa frente al ejército nacional, y esta moderación es positiva para Gorbachov, que necesita la colaboración de Yeltsin para las reformas. Al mismo tiempo, Gorbachov puede apoyarse en la experiencia báltica para mostrar a los conservadores la escasa utilidad y los costes de la política de dureza: los lituanos no se han dejado impresionar por la sangre y, en la consulta del día 9 de febrero —declarada ilegal por Moscú, pero que ha registrado una tasa de participación del 86 por 100— un 91 por 100 de los consultados se ha mostrado en favor de un Estado independiente y democrático; otras repúblicas han adoptado actitudes de abierta simpatía hacia Lituania y los países occidentales, aunque han reaccionado con moderación, han expresado su preocupación por el tratamiento de los países bálticos y han advertido que su ayuda y colaboración económicas, imprescindibles para la URSS, quedarán condicionadas a la evolución de este problema. Tal vez estos hechos hagan reflexionar a los conservadores, al tiempo que las repúblicas

reformistas moderan su actitud; y quizá todo ello permita a Gorbachov restablecer un área de compromiso. No es seguro, sin embargo, que aunque Gorbachov lograra salir adelante sin excesivas hipotecas, fuera capaz de basar en ese compromiso el desarrollo de unas reformas decididas y con futuro: el peso de las fuerzas conservadoras continuará siendo grande, la opinión democrática y reformista sigue estando poco organizada y el propio Gorbachov nunca ha decidido su grado de compromiso con las reformas.